

Las Llaves del privilegio



Andro Mimica Guerrero

Exseremi de Gobierno

Lo que hoy conocen los magallánicos es extremadamente grave. No estamos hablando de un error administrativo menor, ni de una simple desprolijidad burocrática. Estamos hablando de eventuales intervenciones destinadas a alterar el acceso a viviendas dirigidas a familias vulnerables, precisamente aquellas que llevan años esperando una oportunidad real para acceder a un hogar digno.

La situación que involucra al diputado Alejandro Riquelme y la entrega de un subsidio habitacional a su pareja no puede relativizarse ni minimizarse. Aquí existe una responsabilidad política evidente, porque cuando una autoridad utiliza, o permite utilizar, redes de influencia alrededor de beneficios sociales, se produce un profundo daño para cientos de familias que esperan pacientemente, cumpliendo requisitos, haciendo filas y viviendo durante años en condiciones precarias.

Cada subsidio entregado de manera irregular significa una familia vulnerable menos con acceso a una vivienda. Así de simple. Y eso es precisamente lo indignante.

Aquí nadie puede intentar lavarse las manos ni actuar como comentarista externo respecto de hechos en los que existieron relaciones directas con personas hoy investigadas administrativamente o mencionadas en antecedentes remitidos a Fiscalía. La ciudadanía está cansada de ver cómo algunos sectores políticos exigen transparencia sólo cuando conviene, pero guardan silencio cuando los cuestionamientos golpean a los propios.

La consejera Roxana Gallardo pretende apuntar exclusivamente a determinadas autoridades o funcionarios, pero omite transparentar su propia cercanía política y operativa con personas que hoy aparecen vinculadas a estos casos y que participaron activamente en materias relacionadas con comités y agrupaciones de vivienda en la región. Si se exige transparencia y responsabilidades administrativas, aquello debe aplicarse a todos los actores que participaron, tuvieron vínculos o mantuvieron cercanía con estas redes de influencia alrededor del sistema habitacional.

Por eso hoy no basta con declaraciones evasivas ni con comunicados ambiguos. Tiene que hablar el presidente regional del Partido Republicano, hoy director de Corfo en Magallanes, Javier Romero. Tiene que hablar la delegada presidencial regional, Ericka Farías. Tiene que hablar el presidente nacional del Partido Republicano, Senador Arturo Squella. El silencio frente a hechos de esta gravedad sólo profundiza la desconfianza ciudadana.

Además, es indispensable que frente a estas acusaciones se revisen todos y cada uno de los reemplazos habitacionales que pasaron por las manos de la ex funcionaria que ejercía como jefa del Departamento de Operaciones Habitacionales. La ciudadanía merece saber si existen otros casos similares, otras eventuales irregularidades o nuevos privilegios políticos como los que hoy involucran al diputado Alejandro Riquelme.

Pero también deben dar explicaciones quienes durante años mantuvieron una relación política y pública permanente con la funcionaria hoy cuestionada. La consejera regional Roxana Gallardo, el alcalde Claudio Radonich y el ex diputado Christian Matheson tienen el deber político de aclarar si estaban al tanto de este tipo de anomalías o si tuvieron conocimiento de situaciones irregulares vinculadas al sistema habitacional regional.

Las fotografías, actividades públicas y constantes discursos de agradecimiento hacia la funcionaria no pueden hoy simplemente desaparecer como si nunca hubiesen existido. La ciudadanía tiene derecho a exigir claridad, responsabilidades y transparencia total frente a hechos que afectan directamente a familias vulnerables que llevan años esperando una vivienda digna.

Las familias que esperan durante años por una vivienda merecen un sistema transparente, sin privilegios, sin favoritismos y sin utilización política de los beneficios del Estado. Merecen igualdad ante las reglas y no una política habitacional capturada por redes de influencia.

Merecemos todos conocer la verdad.